

En ellos figuran, entre otros movimientos, el traslado del general Julio Alsogaray al frente de la guarnición de Campo de Mayo; la designación del coronel Alcides López Aufranc como jefe del Regimiento Blindado C 10, y la remoción del general Guillermo Salas Martínez, de su cargo de comandante del III Cuerpo (Córdoba) para diluirlo en el Estado Mayor.

El Poder Ejecutivo se vio obligado a tomar medidas contra los sindicatos. El enfrentamiento gobierno-sindicatos seguía vigente, un decreto dispuso la cancelación de la personería a aquellos que actuaran en política: la Unión Obrera Gastronómica fue sancionada. Los diputados justicialistas ensayaron una interpelación al ministro Palmero acerca de los motivos de la suspensión del acto del 17; preguntaron también por la cancelación de personerías gremiales.

El debate se agotó en sucesivos altercados, pero Ricardo Barben consiguió dar una explicación más coherente: "No sé si cometo una indiscreción al decir que tengo por qué saber que tanto el ministro del Interior como el presidente de la Nación eran partidarios decididos de la realización de los actos". Por supuesto, en su peculiar estilo, Ricardo Balbín no aclaró por qué se prohibieron. Desde el peronismo no se aceptó el criterio de Balbín. Los sindicatos abandonaban la mesa de negociaciones: las 62 Organizaciones reunidas en el Sindicato de Molineros indicó a la CGT paros sorpresivos, manifestaciones y huelgas. Pan reforzar la acción psicológica contra el gobierno, los diputados justicia listas abandonaron el recinto de la Cámara: "Los muertos no esperan", fue el homenaje estremecido de Paulino Niembro a Gabriel Musy.

Era visible observar que la lucha estaba rejuveneciendo al peronismo a través de una constante incorporación de jóvenes. Íntimamente, sin embargo, llegaban a confesar que toda la labor por inscribir al peronismo en la legalidad estaba fracasando. El gobierno lo seguía empujando hacia la marginalidad.

EL GOBIERNO SE ENDURECE

Para los dirigentes de UDELPA, por ejemplo, había llegado a hacerse carne la idea de que el gobierno buscaba estabilidad al ubicarse en el rincón contrario al de Perón. "Contra los que sostienen que la estabilidad debe lograrse con el concurso peronista, el gobierno ha adoptado la posición de lograrla, combatiéndolo".

Pero ¿qué si no es así? Un conservador, Emilio Hardoy, lo analiza: "El gobierno está negociando todavía con el peronismo, pero las FF.AA. no tolerarán ningún entendimiento". El péndulo vuelve a oscilar cuando se consulta a los democristianos; Salvador Busacca considera que "el proceso político iniciado con la llegada de Isabel Perón fue conducido inicialmente por el gobierno" y que "ahora el juguete se le ha escapado de las manos, con todos los gremios en la calle desatando el caos social".

Tal vez esa explicación sea más sencilla y se origine en la división interna del oficialismo ante el problema peronista, un grupo quiere llevar adelante la batalla contra los gremios peronistas convencido de que "con el desmantelamiento de la estructura gremial, la UCRP puede ganar en 1967 la elección de la provincia de Buenos Aires", los otros temen el enfrentamiento y sus consecuencias, y señalan al peronismo como "la masa latinoamericana que actúa como barrera del comunismo". En los hechos era evidente que prevalecían en el gobierno los grupos que reclamaban mano dura con el peronismo.

Desde el local de la Unión de Obreros Barraqueros de Avellaneda, 220 delegados gremiales dispararon sus cargas.

La declaración repudió los pactos "entre quienes invoquen una inexistente representación y los personeros del oficialismo".

La Asamblea de las "62" registró algunas sutilezas: inmediatamente después de expresar

"Contra los que sostienen que la estabilidad debe lograrse con el concurso peronista, el gobierno ha adoptado la posición de lograrla, combatiéndolo".

"simpatías por la misión de paz y conciliación que realiza la señora Isabel Perón", se reiteró la devoción por la figura insustituible de Eva Perón.

No eran pocos los que especulaban con la posibilidad de la formación de un nuevo comando inducido por Isabel, antes de su partida lo cual -especulaban algunos- podría dar margen al gobierno para negociar con un peronismo complaciente.

La reunión del Comité Central Confederal de la CGT produjo nerviosismo en el gobierno. El edificio de Azopardo e Independencia había retomado el ritmo de sus viejos tiempos, para regocijo de los más activos luchadores y para colmo, con la figura de Vandor en ascenso. El cuerpo de la CGT tenía formada su composición de lugar horas antes de dar a conocer su palabra oficial: "Calculamos -dijeron los informantes oficiosos- que a la movilización de la masa obrera argentina seguirán medidas cada vez más severas por parte del gobierno. Pero en esa forma, Arturo Illia caerá totalmente en manos de sus instrumentos: las organizaciones policiales y las Fuerzas Armadas. Contrariamente, podría surgir un sector militar con sensibilidad social para enfrentar a los radicales. Las dos posibilidades juegan a nuestro favor: la primera nos situará a la cabeza de la oposición; la segunda nos ofrece una posibilidad de gobernar junto a los militares", se aventuraban a opinar algunos dirigentes.

Finalmente, el Comité repudió por inconstitucional el decreto 9080/65 que reprime las actividades políticas de los sindicatos, y trazó su estrategia para lo inmediata. Hubo clima para la agitación: se dispuso facultar al secretario para que acentúe la movilización de los trabajadores, disponiendo tareas de difusión, concentraciones, abandono de tareas, paros, marchas, manifestaciones, en la oportunidad en que las circunstancias lo aconsejen, y las agitaciones previas que en cada caso sean menester.

En conversaciones oficiosas con enlaces gremiales, los ministros políticos Juan Palmero y Leopoldo Suárez ofrecían, discretamente, un bálsamo para restañar las heridas: "Los gremios no deben hacer más agitación, porque los militares se irritan. ¿Qué quieren, la renuncia de Solá? Bueno, podemos hablar". Pero la estrategia sindical-peronista no se contenta con un trofeo menor: "Un cambio de hombres no modifica nada; aspiramos a más", fue la réplica.

LOS MILITARES DE AMÉRICA

Pese al hermetismo de que se rodeó la VI Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Lima, trascendieron muchos detalles por demás significativos. La reunión incluyó a representantes de dieciocho ejércitos americanos: los de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Costa Rica, Chile, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Las conversaciones giraban alrededor de un explosivo eje político: la necesidad de unificar criterios sobre el rol que les cabe a los ejércitos en el desarrollo nacional como una forma de "prevenir la expansión comunista"; la "doctrina de la seguridad" ya estaba en marcha. El tema se había tratado en West Point, Estados Unidos. Entonces, los militares acogieron favorablemente la sugerencia del comandante argentino, Juan Carlos Onganía: formar una Fuerza Interamericana de Paz. Fue así como Onganía se convirtió en uno de los polos visibles de la asamblea de Lima: el otro se formó con quienes sostenían que las reformas económicas bastan para neutralizar la acción del extremismo. "La mejor manera de evitar la subversión consiste en superar el subdesarrollo y poner la educación al alcance de todos, proporcionar vivienda cómoda e higiénica, proteger la salud y la alimentación", sostuvo, Diego Sánchez, del Perú. "Porque esta acción requiere inversiones no siempre disponibles en el área privada" -opinó- "se hace preciso que los militares entren a jugar el papel de promoción, sin descuidar por eso, las medidas de seguridad contra los guerrilleros". En esos días, el ejército del Perú anunció la construcción de una carretera entre Satipo y Puerto Maldonado.